



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*



CLPC-OGR/ml/45-2016

06 de octubre de 2016


008000050

**Licenciado
Luis Eduardo López Ramos
Encargado del despacho
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho**

Licenciado López:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día 04 de octubre del año 2016, a la **Iniciativa de Ley número 4998** que dispone aprobar **LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL**.

Atentamente


Diputado Oliverio García Rodas
Presidente



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.

c.c. archivo



00000051

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DICTAMEN No. 14-2016

INICIATIVA 4998

**LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL**

HONORABLE PLENO

Con fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió el tres de mayo del mismo año a esta Comisión para su estudio, análisis y procedente dictamen la Iniciativa de Ley con número de registro **4998**, que dispone aprobar Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta Iniciativa fue presentada por el Diputado Oliverio García Rodas el dieciséis de noviembre del año dos mil quince.

ANTECEDENTES

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue ratificado mediante el Decreto 03-2012 del Congreso de la República. El depósito de ratificación fue realizado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el dos de abril del año dos mil doce, cobrando vigencia a partir del dos de julio del mismo año. Con ello, Guatemala fue el Estado número ciento veintiuno en ratificar el Estatuto de Roma –en adelante el Estatuto-.

A partir de la Ratificación y de acuerdo con el Diputado ponente, en su exposición de motivos, expresa que el Estado adquirió una serie de compromisos destinados a dar viabilidad a la aplicación de dicho instrumento internacional. Entre los compromisos resalta la complementariedad normativa y la existencia de procedimientos que permitan la efectiva cooperación del Estado guatemalteco ante los órganos de la Corte Penal Internacional. A su vez, expone que existen tres razones político criminales por las cuales, la necesidad de una Ley de



00000052

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Implementación, siendo estas: a) el Estado de Guatemala ha decidido no tolerar actos que atentan contra la dignidad de los seres humanos, por lo que los protege persiguiendo penalmente a toda persona que atente contra ella; b) reflejar el efecto preventivo de la pena (prevención general) como parte de las medidas de no repetición; y c) evidenciar la protección de la persona como fin del Estado y el carácter universal de esta protección.

En tal sentido, el ponente expresa, que la implementación del Estatuto requiere una adecuación normativa del Derecho Penal a los estándares internacionales provenientes de los Convenios y Tratados internacionales ratificados por Guatemala. Entre ello, y de mucha relevancia para la protección de las mujeres, los que tienen relación con la violencia sexual, los cuales, a partir de la ratificación de dicho instrumento, obligan a ser incorporadas como mecanismos de protección de la libertad, integridad e indemnidad sexual. Así, la propuesta presentada no solo tiende a crear procedimientos de cooperación judicial y asistencia, sino, incluye reformas a la legislación penal guatemalteca, orientada toda a mejorar las descripciones típicas.

Se ha observado las recomendaciones de los Órganos de los Tratados y la sentencia 1822-2011 de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para poder observar los cambios en esas descripciones típicas. Con lo cual, se da paso a que sean propuestas apegadas al bloque de constitucionalidad.

En cuanto a los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra la seguridad internacional o contra la paz y genocidio, se han creado aquellos que estaban por fuera de la regulación penal, dando como resultado un derecho penal guatemalteco moderno y ajustado al derecho penal internacional. El representante expone, además, que Guatemala se pone a la cabeza de todas las naciones al incluir desde ya lo acordado en la Asamblea de Estados partes en la Convención de Kampala del año 2010, respecto del crimen de agresión, o contra la seguridad internacional o contra la paz.



00000053

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Para la presentación de esta iniciativa de Ley, de acuerdo a lo expuesto por el Representante, se ha tomado participación de entidades del Estado, entre ellas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Procurador General de la Nación. También, se ha presentado la propuesta para su visto bueno ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Presidencial Asesora del Ejecutivo en Derechos Humanos, obteniendo el apoyo necesario en su contenido. En el mismo sentido, expone que el proceso tomo en consideración la legislación comparada y las experiencias latinoamericanas, las cuales han servido de base para el desarrollo de los modelos de cooperación e implementación bajo el sistema jurídico continental.

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

El expediente 171-2002 de la Honorable Corte de Constitucionalidad, contiene la opinión consultiva que dicha Corte dió en el año 2002 al Señor Presidente de la República de Guatemala sobre la constitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En ella se lee que dicho instrumento no es incompatible con lo dispuesto con el texto Constitucional, y que las figuras en ellas contenidas responden al Derecho Internacional del cual el Estado de Guatemala como parte de la Comunidad Internacional promueve.

A partir de dicha opinión, las figuras que se han propuesto en la Iniciativa 4998, son acordes a aquellas que se promueven en el texto del Estatuto de Roma, y deben ser interpretadas a la luz del mismo. Sin embargo, debe tenerse en consideración que existen algunas disposiciones que parecieran ser contrarias al texto constitucional, lo cual no es así, pues las mismas lo que hacen es garantizar el proceso ante la Corte Penal Internacional, y no ante los órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca.



00000054

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

En tal sentido, en la parte general de la Iniciativa, artículo once de la misma, se ha dispuesto que para las personas responsables de los delitos previstos en el Título II de la Iniciativa (lesa humanidad, crímenes de guerra, contra la paz) cometidos en el escenario y contexto de los crímenes de relevancia internacional, no proceden beneficios penitenciarios cuando sean condenadas por la Corte Penal Internacional y el cumplimiento de la pena sea dispuesto en territorio guatemalteco, siguiendo así las reglas y disposiciones del Estatuto de Roma que guía la actuación de dicha Corte Internacional. De igual forma, se debe interpretar en cuanto al comiso de bienes a favor de la Corte Penal Internacional, dispuestos en el Estatuto de Roma, pues debe siempre diferenciarse entre el proceso ante la Corte Penal Internacional y sus reglas, y los procesos ante el sistema de justicia nacional, para el cual siempre y en todo caso aplican las reglas del derecho nacional.

Teniendo presente lo expresado, al realizarse las reformas de actualización de ciertas figuras delictivas en el Código Penal, no se están alterando las disposiciones procesales nacionales para su persecución y juzgamiento, sino, únicamente actualizando las mismas conforme los requerimientos del derecho internacional y a la luz de la complementariedad. Igual sucede con la creación de nuevos tipos penales en el Código Penal, tal es el caso de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Finalmente, como la misma Corte de Constitucionalidad opinó, al respecto de la figura de la entrega, esta no es contraria a la Constitución Política de la República, cuando en el artículo 27 de la misma se dispone "...no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional..." con lo cual admite que en instrumentos, como el Estatuto de Roma, cuya finalidad es la creación de una norma penal internacional con disposición de un órgano jurisdiccional, que requiere de la cooperación de los Estados para que aquellas personas que deban ser procesadas puedan ser entregadas, no violenta la norma constitucional.



00000055

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

-Aspecto Sustantivo (complementariedad)

Para poder interpretar la iniciativa 4998, en especial el Título II de dicho texto, se debe tener en consideración que en la normativa penal vigente en Guatemala existen ciertas conductas delictivas ya reprochables por el derecho internacional, tal es el caso, de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzadas, entre otras. Sin embargo, no existe la consideración de que estas conductas, al ser realizadas de forma sistemática, previamente planificadas y contra población civil, puedan interpretarse como una actividad tendiente a la eliminación de un grupo de personas por razones diversas, o a por querer imponer un sistema o intimidar a otras personas, en otras palabras, lesionar la dignidad humana. Ante ello, se ha dispuesto que si esas conductas delictivas son cometidas bajo ciertos contextos y parámetros de actuación sean considerados delitos de lesa humanidad.

A su vez, existen otras figuras delictivas, como el apartheid y la persecución de población civil, que no se encuentran descritas en nuestro derecho penal, pero que se han considerado que únicamente pueden ser cometidas como figuras sistemáticas y planificadas, pues sus alcances atentan contra grupos de personas, razón por la cual la conducta típica y antijurídica ha sido incluida únicamente bajo el contexto de lesa humanidad.

Sucede igual con el tema de los crímenes de guerra, en este caso, teniendo en cuenta que en Guatemala el desarrollo de los crímenes de guerra es muy precario, disposición que ha llevado a integrar las figuras mínimas que requiere el Estatuto de Roma, sin derogar el artículo 378 del Código Penal, pues por esa vía sería posible perseguir otros delitos de los desarrollados en el Derecho Internacional Humanitario.



000000056

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Existen otras figuras delictivas, como las de violencia sexual, que además de darles el carácter y contexto de lesa humanidad, o de crimen de guerra, deben ser incluidas como delitos comunes, por representar una ventaja en la protección de las personas contra la violencia sexual, tal es el caso de la prostitución forzada, la inseminación forzada, el embarazo forzado, la esclavitud y esclavitud sexual.

Concuerda con este desarrollo del derecho, el incorporar el Crimen de Agresión, o contra la seguridad internacional o contra la paz, en el sentido del uso de la fuerza contra otro Estado sin observar la Carta de Naciones Unidas o las disposiciones del Consejo de Seguridad. Algo novedoso y en el cual Guatemala es pionero en su integración dentro del derecho nacional.

Finalmente, las disposiciones de actualización tipos penales ya existentes, a la luz de los estándares internacionales y disposiciones internas como las dadas por la Corte de Constitucionalidad.

-Aspecto adjetivo (cooperación y asistencia judicial)

Se evidencia que la base es el derecho procesal penal, y únicamente se ha matizado el procedimiento de audiencia en caso de detención y correspondiente entrega de la persona a la Corte Penal Internacional cuando esta lo ha pedido. A su vez, siguiendo la tendencia moderna de cooperación, se ha designado un modelo mixto de comunicación, respetando la norma de que el Ejecutivo representa al Estado y añadiendo la posibilidad de comunicación con el órgano de Persecución Penal, en razón de su competencia exclusiva y de la viabilidad de funcionamiento de sus requerimientos, todo bajo el estricto control judicial interno.

Advierte el procedimiento la posibilidad de tener comunicaciones confidenciales entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Penal Internacional o con sus órganos, utilizando igualmente las vías de comunicación oficial. De igual forma, los informes de peritos, víctimas, expertos y testigos, pudiendo ser transmitidos sin que necesariamente se conozca su contenido.



00000057

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Modelos de cooperación y asistencia judicial exigen que exista un sistema de reglas para los casos de solicitudes concurrentes, detención en tránsito dentro del territorio nacional y formas de poder dar entregas condicionadas por procesos penales internos pendientes contra una persona.

Asimismo, se han incluido las reglas para comparecencias de peritos, expertos, víctimas y demás personas que sean convocadas por la Corte Penal Internacional. O bien, se ha dejado viable que previa comunicación con la Corte Suprema de Justicia, personal de la Corte Penal Internacional, pueda realizar algunas funciones en el país, para garantizar ciertas resultas del proceso, o bien sesionar en el territorio.

Yendo por la vía de la cooperación y asistencia judicial, denota la iniciativa 4998 haber tomado en consideración las reglas de procedimiento y prueba dadas por la propia Corte Penal Internacional, en el sentido, de resolver cuestiones cuya implicación a la certeza de la entrega del sujeto detenido, corresponde conforme criterios del órgano jurisdiccional internacional. El Estado de Guatemala, por tanto, genera un sistema de cooperación basado en la posibilidad de cumplir con los requerimientos de la Corte, brindar un sistema interno que ayude al sistema de justicia nacional a dar cumplimiento a esos requerimientos, y finalmente, mecanismos que agilicen la respuesta ante cualquiera de las situaciones que se presenten.

Otros países de la región latinoamericana, como Uruguay, Costa Rica, Argentina, Perú, entre otros, han desarrollado reformas legislativas que concuerdan con poder desarrollar mecanismos de cooperación y en este concierto de actualización y reformas, Guatemala promueve que esta cooperación sea efectiva y eficaz.

Además, se han incorporado las reglas de medidas precautorias y embargos, así como la disposición final de los comisos a favor de la Corte Penal Internacional y la posibilidad de que Guatemala mediante la vía diplomática pueda hacerse de



00000058

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

esos bienes cuando estos constituyan bienes inmuebles, destinándolos al fin de la memoria de las víctimas de guerras o de violencia internacional.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Sosteniendo que la iniciativa **4998** responde a la necesidad de implementar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto a la posibilidad de complementariedad y existencia de mecanismos de cooperación y asistencia judicial, esta Comisión considera que es una herramienta jurídica legislativa que permite, además, incorporar figuras delictivas que tienden a dar mayor protección a las personas, especialmente en el ámbito de la violencia sexual.

Otras formas de poder generar complementariedad y asistencia judicial fueron evaluadas, pero la existencia de una norma específicas, cuyas disposiciones atienden al fin exclusivo de que Guatemala forme parte de la Comunidad Internacional bajo el entendido de que se compromete al respeto de la dignidad de los seres humanos y de sus derechos, es un claro mensaje de que el Estado tiene como fin a la persona y su desarrollo.

Esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera que el sistema de justicia nacional no es violentado, ni los derechos, ni las garantías y principios constitucionales, además, que todas las disposiciones son complementarias al derecho internacional, el cual, como ha quedado expreso conforman el bloque de constitucionalidad.

DICTAMEN

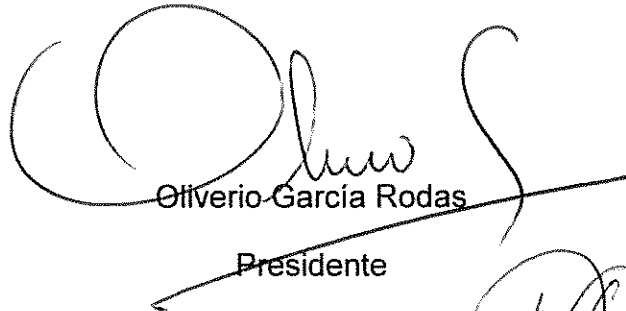
Ante estas consideraciones la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, luego del análisis, estudio y consultas correspondientes, emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa **4998** por ser un proyecto de iniciativa necesario, oportuno, viable y constitucional.



00000059

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

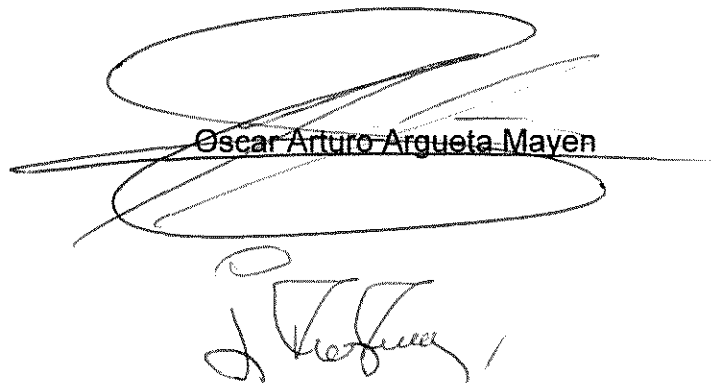
Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, en la ciudad de Guatemala el día martes cuatro de octubre de dos mil dieciséis.


Oliverio García Rodas
Presidente

Carlos Enrique López Girón
Vicepresidente


Alicia Dolores Beltrán López
Secretaria


Luis Pedro Álvarez Morales


Oscar Arturo Argueta Mayen

José Alejandro De León Maldonado


Juan Manuel Díaz-Durán Méndez



000000060

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Walter Rolando Félix López

Juan Ramón Lau Quan

Fernando Linares Beltranena

Ervin Adim Maldonado Molina

Amilcar de Jesús Pop Ac

Juan José Porras Castillo

María Eugenia Tabush de Sánchez

Germán Estuardo Velásquez Pérez

Eduardo Zachrisson Castillo.

DECRETO NÚMERO _____-2016

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, que su fin supremo es la realización del bien común, y que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala, habiendo ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ha reconocido los principios fundamentales del derecho penal internacional, en especial ha admitido la responsabilidad penal individual internacional. Por tal motivo el Estado de Guatemala ya cuenta con delitos que regulan actividades contrarias a la protección de la dignidad de la persona, los cuales se mantendrán vigentes pues se constituyen en una garantía de protección de las personas; sin embargo, necesitan una armonización con los estándares internacionales.

CONSIDERANDO

Que los crímenes más graves contra la humanidad han sido tan diversos que actualmente se ha ampliado el catálogo de delitos, lo cual exige que el Estado de Guatemala para garantizar el ejercicio de la acción penal contra responsables de crímenes internacionales, incorpore las nuevas figuras y adopte las reformas necesarias para la efectiva incorporación del derecho internacional.

CONSIDERANDO

Que el Congreso de la República ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional mediante el Decreto número 03-2012, con el cual el Estado de Guatemala acepta la competencia de la Corte Penal Internacional, debiendo

asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación específica que señala el Estatuto de Roma.

CONSIDERANDO

Que la Corte Penal Internacional ejerce su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes internacionales que el Estatuto de Roma establece y que su carácter es complementario de la jurisdicción interna.

POR TANTO

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA

La siguiente,

LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

TÍTULO I

DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es implementar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, reformando la legislación penal interna para la tipificación de los delitos de crímenes de trascendencia internacional, sus principios y establecer los mecanismos de cooperación entre el Estado y los órganos de la Corte Penal Internacional.

Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley regula lo relativo a los crímenes de trascendencia internacional establecidos en el Estatuto de Roma ratificado por Guatemala mediante el Decreto 03-2012 del Congreso de la República, que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; en adelante el Estatuto; así como las disposiciones de complementariedad y cooperación que el Estado de Guatemala debe realizar para con los órganos de la Corte Penal Internacional.

Artículo 3. Aplicación General. A los tipos penales tipificados en la presente ley, les es aplicable la Parte General del Código Penal guatemalteco, Decreto 17-73 del Congreso de la República, con excepción de aquellas disposiciones que sean normadas en la presente ley.

Artículo 4. Conceptos y Definiciones. Para efectos de esta ley, se tienen por incorporados los conceptos y definiciones contenidos en el Estatuto de Roma. Dichos conceptos y definiciones serán interpretados conforme a las disposiciones del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho nacional, así como la jurisprudencia de tribunales penales internacionales y tribunales nacionales.

Artículo 5. Interpretación. La interpretación de las regulaciones, disposiciones y demás contenido del Estatuto de Roma se hará conforme la jurisprudencia y criterios emitidos por la Corte Penal Internacional. En caso de no existir jurisprudencia o criterios sobre una regulación o disposición del Estatuto deberá observarse los instrumentos de derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. De igual forma, todas aquellas disposiciones jurisprudenciales de Cortes Internacionales y de Tribunales penales internacionales.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 6. Orden superior. El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en la presente ley, en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea civil, militar o policial, no será eximido de responsabilidad penal, salvo que:

- a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate,
- b) La orden no fuera ilícita.

A los efectos del presente artículo, se entiende que las órdenes de cometer genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos contra la paz, seguridad internacional o agresión, son ilícitas. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerlas.

Artículo 7. Responsabilidad de los jefes y otros superiores. El que ejerza funciones de mando, autoridad o control efectivo sobre fuerzas militares, policiales o civiles y en razón de ese mando, autoridad o control permitiere u ordenare que se cometan cualquiera de los delitos previstos en la presente ley, será responsable de los mismos, siempre que:

- a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;
- b) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner la comisión del delito en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Quien en razón de ese mando, autoridad o control fuera responsable de acuerdo a lo expresado en este artículo, se le incrementara la pena en una tercera parte de la señalada por el tipo penal específico al que fuera condenado.

En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:



- a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;
- b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo.

Artículo 8. Improcedencia de tener cargo oficial. Para los delitos regulados en el Título II de esta ley se dispone que ninguna persona goce de inmunidad para la investigación o judicialización de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley. En ningún caso el cargo oficial de una persona la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá atenuante para la imposición de la pena.

Artículo 9. Eximentes de responsabilidad penal. La amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes o eximentes de responsabilidad penal, y toda medida que pretenda impedir la investigación penal o suprimir los efectos de una sentencia, es inaplicable a cualquiera de los delitos previstos en el Título II de la presente ley.

Artículo 10. No aplicación de causas de justificación. No constituyen causas de justificación de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley, la existencia de circunstancias tales como conflictos armados, estados de sitio, estados de alarma, inestabilidad política interna, desastres naturales o cualquier emergencia pública que conlleve la suspensión de derechos civiles de forma temporal.

Artículo 11. No aplicación de beneficios penitenciarios. Las personas condenadas por cualquiera de los delitos previstos en el Título II de la presente ley, no podrán ser beneficiadas con redención de pena, suspensión condicional de la pena, conmuta, libertad condicional, establecidas en las leyes penales del país; asimismo, no podrá acceder a las fases de pre libertad y libertad controlada establecidas en la ley del régimen penitenciario guatemalteco.

Se exceptúan de la disposición anterior cuando una persona actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero; en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero; o de un bien que fuese esencial para la realización de una misión militar; contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o para alguno de los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para constituir una

circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado.

CAPÍTULO III

VÍCTIMAS

Artículo 12. Víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima a la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal interna y el derecho internacional. También se consideran víctimas a los familiares o a las personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, y las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Por víctimas se entenderá también, las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, la ciencia o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios.

Artículo 13. Atención a víctimas. Cuando en el Estado de Guatemala se encuentren una o varias víctimas de un delito perseguido por la Corte Penal Internacional, el Estado deberá brindarles asesoramiento, asistencia, atención, servicios y apoyo adecuados, a fin de prevenir la victimización repetida.

Los órganos encargados de la comunicación y cooperación con la Corte Penal Internacional deberán crear los mecanismos de protección observando los estándares y disposiciones de la Corte Penal Internacional.

De igual forma se prestará servicios de traducción e interpretación de documentos cuando las víctimas así lo requieran en función de su idioma.

CAPÍTULO IV

PRINCIPIOS

Artículo 14. Jurisdicción Universal. Cuando en el territorio guatemalteco se encuentre una persona sospechosa de haber cometido cualquiera de los delitos previstos en la presente ley, independientemente del territorio o lugar de la comisión del delito, de la nacionalidad de la persona sospechosa, o la nacionalidad de las víctimas, el Estado de Guatemala someterá el caso a sus autoridades competentes a efecto de investigación, cuando procediere de enjuiciamiento, a menos que procediere la extradición a un Estado o la entrega a un tribunal penal internacional.

Cualquiera de los delitos previstos en la presente ley, rigen incluso cuando los mismos hayan sido cometidos en territorio extranjero.

Artículo 15. Imprescriptibilidad. Es imprescriptible la acción penal y la pena en los crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y los crímenes contra la paz, así como todas las normas que el derecho internacional haya declarado como normas de ius cogens.

Artículo 16. Cosa Juzgada. En los delitos previstos en la presente ley, no se procesara a ninguna persona que anteriormente hubiere sido procesada por los mismos hechos y bajo los mismos fundamentos, a excepción de:

- a) cuando el proceso penal que se siguió hubiera perseguido el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal.
- b) cuando una sentencia absolutoria o una resolución favorable al acusado no hubiere sido resultado de un proceso independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el Derecho Internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

TÍTULO II



CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD Y DE RELEVANCIA INTERNACIONAL.**CAPÍTULO I****DEFINICIONES PARA APLICACIÓN DEL TÍTULO II**

Artículo 17. Para los efectos del presente título, se entiende por:

- a) Ataques contra población civil: la línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contenidos en el Estatuto de Roma y en la presente ley contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o la política de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.
- b) Personas y bienes protegidos, a quienes el derecho internacional humanitario ampara como tales en el marco de un conflicto armado interno o internacional.
- c) Fuerzas peligrosas, aquellas que al ser liberadas pueden ocasionar pérdidas importantes en la población civil, tales como las aguas contenidas en presas o diques y la energía eléctrica o nuclear generadas en centrales.
- d) Bienes culturales, los bienes muebles e inmuebles, tales como monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los centros monumentales que comprendan un número considerable de bienes culturales, obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico o artístico, así como edificios cuyo destino principal sea conservar o exponer bienes culturales descritos, tales como museos, bibliotecas, depósitos de archivos y refugios destinados a la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado.
- e) Perfidia, los actos que apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarlo, den a entender a éste que tiene derecho de protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados.



f) Violencia, los actos realizados mediante la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra una persona, u otra persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de ésta o esas personas de dar su consentimiento genuino.

CAPÍTULO II

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Artículo 18. Comete delitos de lesa humanidad quien mediante ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque o a fin de promover, o cumplir una política o plan comete los actos que a continuación se describen:

I Asesinato. Quien haya dado o causado muerte a una o más personas, será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años.

II. Exterminio. Comete exterminio quien intencionalmente someta a una población o parte de ella a condiciones de vida encaminadas a causar su destrucción física total o parcial, será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años.

III. Esclavitud. El responsable de este delito será sancionado con prisión de quince a treinta años.

IV. Deportación, traslado o de desplazamiento ilegal. Comete deportación o traslado de población, quien o quienes deportaren o trasladaren forzosamente a una o más personas o a una población que se encuentre legítimamente en un territorio, desplazándolo a otro Estado o territorio mediante la expulsión o cualquier otra medida coactiva sin motivos previamente establecidos en las leyes nacionales o en el Derecho Internacional, será sancionado con prisión de quince a treinta años.

V. Detención arbitraria. El responsable de este delito será sancionado con prisión de ocho a doce años.

VI. Tortura y Tratos crueles o inhumanos. Quien torture será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años, y quien trate de forma cruel o inhumana o cause de otra manera grandes dolores o sufrimientos será sancionado con prisión de ocho a doce años.

VII. Crímenes sexuales. Quien cometa, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, inseminación forzada, inseminación fraudulenta o cualquier otra forma de violencia sexual será penado con prisión de diez a veinte años.

VIII. Persecución. Comete el delito de persecución, quien con intención prive gravemente de sus derechos fundamentales a una persona o colectivo de personas por su pertenencia a ese colectivo, basado en motivos políticos, raciales, de nacionalidad, étnicos, culturales, religiosos, de género en contradicción con el derecho internacional, será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años.

IX. Desaparición forzada. El responsable de este delito, será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años.

X. Apartheid. Quien con la intención de promover o mantener un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial o étnico, sobre uno o más grupos raciales o étnicos cometa uno o más de los siguientes actos:

- a) Denegación del derecho a la vida y a la libertad personal contra uno o más miembros de uno o más grupos raciales;

- i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;
 - ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
 - iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales;
- b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física, total o parcial;
 - c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal o tales grupos;
 - d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;
 - e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial sometiéndolos a trabajo forzoso;
 - f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid, privándolas de derechos y libertades fundamentales.

Será sancionado con prisión de treinta a cincuenta 50 años.



CAPÍTULO III

CRÍMENES DE GUERRA

Artículo 19. Comete crímenes de guerra quien, en el contexto de un conflicto armado o en relación con ese contexto, conforme los términos en que los conflictos armados sean definidos en el derecho internacional, realizare uno o más de los siguientes actos:

I. Homicidio intencional. Quien dé muerte intencionalmente a una persona protegida por el derecho internacional humanitario, será sancionada con prisión de treinta a cincuenta años.

II. Tortura y tratos inhumanos. Quien torture será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años y quien trate de forma cruel o inhumana o cause de otra manera grandes dolores o sufrimientos a una persona, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

III. Mutilaciones y experimentos médicos. Quien someta a una persona protegida por el derecho internacional humanitario a mutilaciones o experimentos médicos o científicos, extracciones de tejidos u órganos o cualquier otro tipo de procedimientos que no estén justificados en razón del tratamiento médico dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud, será sancionada con prisión de treinta a cincuenta años.

IV. Crímenes sexuales. Quien cometa actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual contra una persona protegida por el derecho internacional humanitario, será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años.

V. Apartheid. Quien cometa contra una persona protegida por el derecho internacional humanitario un acto inhumano con la intención de mantener un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial

o étnico sobre uno o más grupos raciales, será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años.

VI. Toma de rehenes. Quien tome como rehén a una persona protegida por el derecho internacional humanitario, será sancionado con prisión de seis a diez años.

VII. Detención arbitraria. Quien prive arbitrariamente a una persona protegida por el derecho internacional humanitario de su libertad, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

VIII. Demora en la repatriación. Quien, en ocasión de un conflicto armado internacional, demore injustificablemente la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

IX. Denegación de garantías judiciales Quien prive a una persona protegida por el derecho internacional humanitario de su derecho a ser juzgada por tribunales pre establecidos y respetando el debido proceso, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

X. Obligación a servir en fuerzas enemigas y reclutamiento de menores de 18 años. Quien obligue a un prisionero de guerra o a otra persona protegida por el derecho internacional humanitario a servir en las fuerzas de una parte que se encuentra en conflicto armado con la parte de la cual dependen dichas personas, será sancionado con prisión de diez a quince años.

Quien reclute, aliste o utilice a una persona menor de 18 años de edad para participar, apoyar o contribuir en las hostilidades o en otras actividades, se le impondrá la pena anteriormente señalada aumentada en una tercera parte.



XI. Abolición de los derechos. Quien declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de las personas protegidas por el derecho internacional humanitario que pertenecen a la parte enemiga, será sancionado con prisión de ocho a diez años.

XII. Deportación, traslado o desplazamiento ilegal. Quien o quienes deportaren o trasladaren forzosamente a una persona o población que se encuentre legítimamente en un territorio, desplazándolo a otro Estado o territorio mediante la expulsión o cualquier otra medida coactiva, será sancionado con prisión de quince a treinta años.

Cuando el traslado sea a territorio ocupado o de la población de la potencia ocupante, o deporto, traslade o desplace dentro o fuera del territorio ocupado la totalidad o parte de la población de ese territorio, la pena será agravada en dos terceras partes.

Si se demostrare que la deportación, traslado o desplazamiento lo exigía la seguridad de los civiles o por razones militares imperativas, no se hará responsable a las personas.

XIII. Ataques prohibidos. Quien ordene o realice ataques prohibidos de acuerdo con los siguientes enunciados, será sancionado con prisión de diez a veinte años:

- a) Atacar a población civil o a personas civiles o a bienes civiles; o lanzar ataques intencionales a sabiendas de que tal ataque causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes civiles o daños extensos, duraderos o graves al medio ambiente natural;
- b) Atacar ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos;
- c) Atacar obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños excesivos a bienes civiles;
- d) Atacar localidades no defendidas o zonas desmilitarizadas; o ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de combate; o ataque edificios,

material, unidades y medios de transporte sanitarios o personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

- e) Atacar un bien cultural protegido o sus inmediaciones en apoyo en acciones militares; o ataque edificios dedicados a la religión, la educación la instrucción, las artes, las ciencias, la beneficencia o monumentos así como los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
- f) Atacar a personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles;

XIV. Armas prohibidas. Quien emplee veneno o armas envenenadas; o gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier liquido, material o dispositivo análogo; o balas que se ensanchen o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones; u otras armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional; será sancionado con prisión de quince a veinticinco años.

XV. Causar hambre. Quien haga padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los elementos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro, de conformidad con los Convenios de Ginebra, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.

XVI. Perfidia. Quien mate, hiera o capture a un adversario valiéndose de medios pérfidos de acuerdo con lo definido en el artículo 17 literal e) de esta ley, será sancionado con prisión de quince a veinte años.

XVII. Uso indebido de signos. Quien utilice de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares, el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra,



y cause así la muerte o lesiones graves, será sancionado con prisión de seis a diez años.

XVIII. No dar cuartel. Quien declare que no se dé cuartel, será sancionado con prisión de seis a ocho años.

XIX. Escudos humanos. Quien utilice la presencia de una persona protegida por el derecho internacional humanitario para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares, será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años.

XX. Apropiación de bienes. Quien se apropie o confisque bienes del enemigo, no justificado por necesidades militares, será sancionado con prisión de diez a veinte años.

A quien destruya los bienes sin justificación de necesidad militar se le incrementará la pena en una tercera parte.

Quien saquee una ciudad o plaza, incluso cuando sea tomada por asalto, será sancionado con prisión de veinte a treinta años.

CAPÍTULO IV

CRÍMENES CONTRA LA PAZ, SEGURIDAD

INTERNACIONAL O DE AGRESIÓN

Artículo 20. Deberá considerarse que los crímenes contra la paz y seguridad internacional, por disposición de la comunidad internacional, en particular la Resolución RC/Res.6 adoptada en la Conferencia de Revisión de Kampala, también es denominado Crimen de Agresión

Artículo 21. Para los efectos del presente capítulo, por crímenes contra la paz, seguridad internacional o de agresión deberá entenderse el uso de la fuerza

armada de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Asimismo, cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

Los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, serán también considerados actos contra la paz, seguridad internacional o de agresión:

- a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque; o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;
- b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado; o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;
- c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;
- d) El ataque, por las fuerzas armadas de un Estado, contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;
- e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo, o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;
- f) La acción de un Estado que permita que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;
- g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.

Artículo 22. Comete el crimen contra la paz, seguridad internacional o de agresión, quien estando en condiciones de controlar o dirigir de forma efectiva las

acciones políticas o militares de un Estado, planifica, prepara, inicia o comete un acto de agresión de acuerdo con lo definido por la presente ley y el derecho internacional.

El responsable del crimen de agresión, será sancionado con prisión treinta a cincuenta años.

Artículo 23. Delitos del capítulo IV del título XI del Código Penal. Se reforma la denominación del capítulo IV del Título XI del Código Penal guatemalteco, Decreto 17-73 del Congreso de la República para que quede redactado de la forma siguiente:

“CAPÍTULO IV

CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD Y DE RELEVANCIA INTERNACIONAL”

CAPÍTULO V

DELITOS ESPECIALES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Artículo 24. Obstaculización de la acción de la Corte Penal Internacional. Comete el delito de obstaculización de la acción de la Corte Penal Internacional quien impida, intimide o busque influenciar por razón de su cargo o mediante el ofrecimiento de ventajas, favores, regalos, dineros y dádivas a un funcionario de la Corte Penal Internacional, con el fin de forzar o persuadir a que el funcionario no cumpla con su función o cumpla indebidamente con sus obligaciones.

Al responsable se le sancionara con prisión de seis a ocho años y multa de cien mil a quinientos mil quetzales.

Artículo 25. Amenazas contra funcionario de la Corte Penal Internacional. Comete el delito de amenazas contra funcionario de la Corte Penal Internacional quien mediante amenazas a la integridad física, el honor o bienes de algún



funcionario de la Corte Penal Internacional o sus familias, le coaccione con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en esta ley.

Al responsable se le sancionara con prisión de seis a ocho años y multa de cien mil a quinientos mil quetzales.

Artículo 26. Atentado contra funcionarios de la Corte Penal Internacional. Comete el delito de atentado contra funcionario de la Corte Penal Internacional, quien atentare contra la integridad personal o la libertad de los funcionarios de la Corte Penal Internacional con la finalidad de obstaculizar la función o el cumplimiento de sus funciones como funcionario de la Corte Penal Internacional.

De igual forma comete este delito quien tomare represalia alguna contra el funcionario de la Corte Penal Internacional por haber cumplido con sus funciones u obligaciones. El presente delito no excluye la comisión de otros delitos tipificados en las leyes penales del país.

Al responsable se le sancionará con prisión de ocho a doce años.

TÍTULO III

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL GUATEMALTECO

CAPÍTULO I

REFORMAS A LA PARTE GENERAL

Artículo 27. Se adiciona el artículo 8bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 8 bis. Entrega. Los delitos tipificados como crímenes contra la humanidad y de relevancia internacional, no se considerarán delitos políticos, ni delitos comunes conexos con delitos políticos.

En aquellos casos en donde la Corte Penal Internacional requiera la entrega de una persona, no se hará distinción alguna basada en el cargo oficial que ostente la persona. Las inmunidades y procedimientos especiales, no serán aplicables para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia.

CAPÍTULO II

REFORMAS A LA PARTE ESPECIAL

Artículo 28. Se adiciona el artículo 173ter al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 173 ter. Esterilización forzada. Comete el delito de esterilización forzada, quien mediante métodos de dominación, o la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa o esas personas u otra persona, o aprovechamiento de un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su consentimiento genuino, privare a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica. El responsable de este delito será sancionado con prisión de diez a quince años.

Artículo 29. Se adiciona el artículo 191bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 191bis. Prostitución Forzada. Comete el delito de prostitución forzada quien mediante métodos de dominación, la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa o esas personas u otra persona, o aprovechamiento de un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su consentimiento, obligare a una persona a realizar actos de naturaleza sexual, esperando obtener ventajas pecuniarias o de otro tipo. Quien sea responsable de este delito será sancionado con prisión de ocho a quince años.



Artículo 30. Se reforma el artículo 192 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 192. Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte en los casos siguientes:

- a. Si durante su explotación sexual la persona hubiere estado embarazada.
- b. Cuando el autor fuere pariente de la víctima, o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de la víctima, o de uno de sus padres.

Artículo 31. Se reforma el artículo 201 BIS del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República siendo su texto el siguiente:

Artículo 201 BIS. Comete el delito de tortura, quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, o la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad, o a disminuir la capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psíquica, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que ha cometido o se sospeche que hubiere cometido o de intimidar a una persona o por ese medio a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Quien o quienes sean responsables del delito de tortura, serán sancionados con prisión de veinte a treinta años.

Artículo 32. Se reforma el artículo 201 TER del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 201 TER. Desaparición Forzada. Comete el delito de desaparición forzada el funcionario o empleado público o personas que actúen con la autorización, el

apoyo o la aquiescencia del Estado, arrestando, deteniendo o por cualquier otra forma, privando de la libertad a una persona o grupo de personas, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

El delito es permanente en tanto la persona desaparecida no aparece o no se conoce sobre el paradero o suerte de la misma.

El responsable del delito de desaparición forzada, será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta años.

Artículo 33. Se adiciona el artículo 202 quinquies al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 202 quinquies. Esclavitud. Comete el delito de esclavitud, quien mediante métodos de dominación, la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa o esas personas u otra persona, o aprovechamiento de un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su consentimiento, se atribuya los derechos de propiedad sobre una o más personas con el fin de comprarle, venderla, prestarle o darle en trueque o todos ellos. Quien fuere responsable, será sancionado con prisión de ocho a quince años. Si la esclavitud se realiza con fines sexuales la pena será agravada en una tercera parte.

Cuando el delito sea cometido sobre personas menores de 18 años o personas con incapacidad volitiva o física, la pena se incrementará en una cuarta parte.

Artículo 34. Se adiciona el artículo 225 D al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 225 D. Embarazo Forzado. Quien confine u obligue a una mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de la violación, agresión sexual, explotación sexual, prostitución forzada, inseminación forzada, inseminación fraudulenta, experimentación para el embarazo o esclavitud sexual, a llevar a término el embarazo, será sancionado con prisión de doce a quince años.



Si el confinamiento u obligación, es con intención de modificar la composición étnica de un grupo o de cualquier otro delito de relevancia internacional, deberá aplicarse el Título XI, Capítulo IV, de los delitos contra la humanidad y relevancia internacional del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.

Artículo 35. Se deroga el párrafo segundo del artículo 424 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.

Artículo 36. Se adiciona el artículo 424 bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 424 bis. Detención arbitraria. Comete el delito de detención arbitraria el funcionario o empleado público o personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado que prive a una persona o grupo de personas de su libertad siendo imposible invocar una base legal que justifique la privación de la libertad, o cuando la persona no ha sido oída y vencida en proceso judicial legalmente establecido y conforme a las garantías, principios y derechos establecidos en la legislación nacional e internacional, o cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos reconocidos por el derecho nacional e internacional.

Quien fuere responsable de este delito, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

Artículo 37. Se reforma el artículo 425 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 425. Tratos crueles o inhumanos. Comete el delito de tratos o penas crueles o inhumanas, el funcionario o empleado público, u otra persona que actúe por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia del Estado, cuando por acción u omisión atente contra la dignidad o la integridad física o psicológica de la persona o la someta a prácticas inhumanas basadas en discriminación distintas todas a la tortura.



Comete este delito el funcionario que, teniendo a su cargo la guardia y custodia de persona detenida le impone una sanción disciplinaria no establecida legalmente o le limita o restringe un derecho no limitado por la ley o sentencia judicial.

Quien o quienes resulten responsables, serán sancionados con prisión de seis a diez años.

Artículo 38. Se adiciona el numeral 6 al artículo 376 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

“6. Violencia sexual contra miembros del grupo.”

Artículo 39. Se deroga el artículo 380 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.

Artículo 40. Se reforma el artículo 414 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 414. Desobediencia. Comete el delito de desobediencia quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones. El responsable será sancionado con prisión de tres a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales.

Se exceptúan de este caso quien se negare a obedecer una orden de cometer delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, delitos contra los deberes de humanidad o crímenes contra la paz y seguridad internacional.

Artículo 41. Se reforma el artículo 420 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República siendo su texto el siguiente:

Artículo 420. Desobediencia. Comete el delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictada dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. El responsable será sancionado con prisión de 6 a 8 años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales.

Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias o resoluciones dictadas por la Corte Penal Internacional dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia.

Se exceptúan de este caso el funcionario o empleado que se negare a obedecer una orden de cometer delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, delitos contra los deberes de humanidad o crímenes contra la paz y seguridad internacional.

Artículo 42. Se reforma el artículo 458 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República siendo su texto el siguiente:

Artículo 458. Colusión. Comete el delito de Colusión, quien mediante pacto colusorio o empleando cualquier otra forma ilícita, evite la citación o comparecencia a juicio a tercero o provoque resoluciones que perjudiquen los derechos de los mismos, será sancionado con prisión de uno a cuatro años y con multa de cinco mil a veinticinco mil quetzales.

Se impondrá la misma sanción a quien obstruya o interfiera con la asistencia o testimonio de un testigo ante la autoridad del sistema de justicia nacional o en la Corte Penal Internacional o en cualquiera de los tribunales o cortes internacionales de los que Guatemala haya reconocido su competencia.

Además de las accesorias correspondientes, incurrirán los abogados que, a sabiendas, dirijan, patrocinen o realicen las gestiones y solicitudes respectivas.

Artículo 43. Se reforma el artículo 458 bis del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:



Artículo 458 bis. Obstaculización de la acción penal. Comete el delito de obstaculización de la acción penal:

Quien influya en otra persona, para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia o cortes internacionales.

Quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares de la administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. De igual forma quien tome represalias contra un testigo por dar su testimonio.

Quien para evitar la obtención de evidencia o medios de prueba, rehusare proporcionar al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal, documentos o información que conozca o que obren en su poder, estando obligado a ello.

Quien con igual fin, destruya u oculte información o documentos, interfiera o haga fraude en la obtención de prueba, o bien proporcione documentos o información falsa o falsificada al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, Dirección General de Investigación Criminal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Cortes Internacionales.

La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas en este artículo, será sancionada con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial.

Artículo 44. Se reforma el artículo 461 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, siendo su texto el siguiente:

Artículo 461. Presentación de testigos falsos. Comete el delito de presentación de testigos falsos quien, a sabiendas, presentare testigos falsos en asunto judicial que se conoce en el sistema de justicia nacional, en la Corte Penal Internacional o en cualquiera de los tribunales o cortes internacionales de los que Guatemala haya reconocido su competencia; asimismo, en asuntos administrativos o ante notario, el responsable será sancionado con prisión de seis años a ocho años y multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales.



Igual pena se impondrá a quien influenciare a un testigo por sí mismo o por interpósita persona, o actuando como intermediaria prevaleciendo para ello el ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas, promesas o favores.

A quien acepte participar como testigo falso se le impondrá la pena incrementada en una tercera parte.

TÍTULO IV

COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EFECTIVA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL

Artículo 45. Obligación de cooperación y asistencia judicial. El Estado de Guatemala deberá cooperar y prestar asistencia judicial plenamente con la Corte Penal Internacional, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma y con esta ley. Todo funcionario o empleado del Estado de Guatemala que conozca o sea notificado por las vías legales establecidas, de una solicitud de la Corte Penal Internacional, se encuentra obligado a diligenciar la solicitud en los plazos que se establezcan en la presente ley.

No podrá invocarse la inexistencia de procedimientos administrativos en las dependencias estatales con obligación de diligenciar solicitudes de cooperación y asistencia judicial emanadas de la Corte Penal Internacional o dirigidas a ella.

Artículo 46. Órgano Central y Órgano de Enlace. La Corte Penal Internacional deberá comunicar directamente sus solicitudes de cooperación y asistencia judicial al Ministerio Público, el cual funge y es reconocido como órgano central de la cooperación sin perjuicio de las responsabilidades de otros órganos del Estado en el ámbito de su competencia. El Ministerio Público es el encargado de recibir, diligenciar o promover ante el Organismo Judicial todas las solicitudes penales o que impliquen una persecución penal dentro de las establecidas para la cooperación y asistencia judicial que realice la Corte Penal Internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, como órgano de enlace, es el conducto diplomático de comunicación con la Corte Penal Internacional.



Artículo 47. Comunicaciones. Todas las comunicaciones de solicitud de cooperación y asistencia judicial provenientes de la Corte Penal Internacional deberán ser por vía simultánea del órgano central y de enlace definidas en el artículo anterior dentro del ámbito de sus competencias.

Toda comunicación que desee realizar cualquier entidad del Estado de Guatemala deberá ser comunicada al Ministerio Público y Ministerio de Relaciones Exteriores. Ninguna comunicación del Estado hacia la Corte Penal Internacional podrá considerarse oficial si no se garantiza plenamente el conocimiento del órgano central y el órgano de enlace.

La comunicación realizada por entidades distintas a los órganos central y de enlace, harán de conocimiento a la Corte Penal Internacional indicando que la información fue entregada a los órganos correspondientes.

Artículo 48. Reserva de comunicación. Toda información solicitada por la Corte Penal Internacional específicamente al Ministerio Público en términos de confidencialidad por razones de protección de víctimas y testigos, o por aplicación de dispensa del principio de especialidad, podrá no ser hecha del conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero éste sí deberá tener conocimiento de la comunicación.

Cuando el Organismo Judicial requiera enviar o recibir información, atendiendo a cuestiones de consulta estrictamente judicial, la información debe ser entregada al Ministerio Público y Ministerio de Relaciones Exteriores para que se diligencie la comunicación, pero la información no puede ser conocida si la autoridad judicial así lo indica.

Artículo 49. Solicitudes de cooperación o asistencia judicial hacia la Corte Penal Internacional. El Estado de Guatemala podrá dirigir a la Corte Penal Internacional y sus órganos solicitudes de asistencia y cooperación por procesos penales que se diligencien en Guatemala y que tengan referencia a crímenes de competencia de la Corte.



Para el efecto deberá observarse lo regulado en el artículo 93 numeral 10 apartado a) y b) del Estatuto de Roma, así como las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional.

Artículo 50. Cooperación o asistencia concurrente. Si el Estado de Guatemala recibe solicitud de cooperación o asistencia judicial por parte de la Corte y sobre el mismo caso, por parte de otro Estado, deberá notificarse a ambos solicitantes de la existencia de otra solicitud y entablar comunicación entre las partes solicitantes, estableciendo en la comunicación que el Estado de Guatemala entiende prioritaria la entrega a la Corte de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de Roma.

Cuando sean solicitudes concurrentes sobre temas que puedan afectar los derechos, seguridad o bienestar de las víctimas o vulnerarse los derechos humanos y procesales de personas con posible responsabilidad penal, el Estado deberá comunicar esos extremos y optar por la que garantice de mejor forma la protección de las personas que puedan resultar afectadas con la solicitud.

Artículo 51. Agilización de la cooperación e idioma oficial. Los documentos provenientes de cualquiera de los órganos de la Corte Penal Internacional que sean referidos a cooperación o asistencia judicial, quedan eximidos del requisito de legalización.

Todas las comunicaciones que el Estado de Guatemala realice con la Corte Penal Internacional serán en español y podrán realizarse en otro idioma oficial cuando sea requerido por la misma Corte.

Artículo 52. Sesiones de la Corte Penal Internacional en Guatemala. Cuando se encuentren en el territorio nacional las personas sujetas a investigación, testigos o víctimas de crímenes que fueron cometidos en otra jurisdicción, o cuando la Corte Penal Internacional así lo desee, se autoriza, previa notificación a la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Penal Internacional sesione en Guatemala.



Artículo 53. Privilegios e inmunidades. El personal de la Corte Penal Internacional gozará en el territorio nacional de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para cumplir con sus funciones, en los términos de artículo 48 del Estatuto de Roma. Asimismo, conforme los convenios, tratados y acuerdos que sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional sean vinculantes para Guatemala.

Artículo 54. Comunicación e Información reservada. Para los efectos de la presente ley, las comunicaciones de cooperación o de asistencia judicial transmitidas por la Corte Penal Internacional hacia el Estado de Guatemala, serán consideradas de carácter reservado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23.9 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La información declarada como reservada por el Estado de Guatemala, que sea requerida por la Corte Penal Internacional deberá ser solicitada a cada entidad estatal por la vía de orden judicial de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Acceso a Información Pública.

Artículo 55. Información confidencial. Toda la información requerida por la Corte Penal Internacional al Estado de Guatemala, será considerada de carácter confidencial de acuerdo con el artículo 22.4 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La información considerada confidencial por la Constitución Política de la República y la Ley de Acceso a la Información Pública puede ser transmitida a la Corte Penal Internacional bajo la garantía de confidencialidad. Esta deberá ser solicitada a cada entidad estatal por la vía de orden judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Acceso a información Pública.

Si el Estado de Guatemala tiene conocimiento de que la información transmitida a la Corte Penal Internacional con carácter de confidencialidad está siendo revelada o existe amenaza de ser revelada, el Estado mediante el órgano responsable deberá solicitar a la Corte la aplicación del artículo 72 del Estatuto de Roma.

Artículo 56. Revelación de información confidencial de terceros Estados u Organismos Internacionales. Cuando al Estado de Guatemala le sea solicitada información que haya sido dada por otro Estado, Organismos



Intergubernamentales u Organismos Internacionales con carácter de confidencial, para poder comunicarla deberá requerir la autorización de quien le haya transmitido la información. De no ser consentida la comunicación de la información por quien la haya proporcionado, deberá informarse a la Corte Penal Internacional de la situación. En estos casos deberá observarse las disposiciones del artículo 73 del Estatuto de Roma.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Artículo 57. Principio de Unidad en la Persecución Penal. Toda solicitud de cooperación y asistencia judicial que requiera al Estado de Guatemala de la detención, entrega, comparecencia, embargo o congelación de activos, o cualquier disposición que afecte el derecho de una o más personas, así como aquellas que requieran de la participación de peritos, testigos y diligencias exclusivamente de competencia del sistema de justicia penal, deberán ser diligenciadas por el Ministerio Público ante el órgano judicial competente para que este emita el auto, decreto o sentencia correspondiente.

Artículo 58. Órgano Jurisdiccional. La Corte Suprema de Justicia determinará el o los juzgados con competencia para el conocimiento de solicitudes de asistencia judicial de la Corte Penal Internacional.

El Ministerio Público deberá emitir la instrucción necesaria para fijar su procedimiento interno de debida diligencia a toda solicitud y definir la fiscalía competente.

Artículo 59. Conocimiento Judicial. Recibida la solicitud de la Corte Penal Internacional, el Ministerio Público deberá, en el plazo de 24 horas, hacer de conocimiento judicial la existencia de la solicitud. Asimismo deberá expresar cuál es su contenido, si requiere la emisión de una resolución judicial y los alcances de la misma.

El Juez deberá emitir su resolución en el mismo acto.

En caso de que la solicitud sea sobre la detención y entrega de una persona, el Juez observará que, previo a la emisión de la orden de detención, las solicitudes cumplan con lo establecido en el artículo 91 del Estatuto de Roma, con excepción del caso establecido en el artículo 92 del mismo Estatuto de Roma.

Si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma, deberá solicitarle al Ministerio Público comunicar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de forma inmediata, para que proceda a la subsanación de los mismos.

Estas comunicaciones deberán ser notificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 60. Fundamento de la orden de detención. Toda orden de detención emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, además de los requisitos establecidos previamente en la legislación, deberá incorporar la razón de que la orden es emitida por solicitud de la Corte Penal Internacional, la cual cumple con los requerimientos del artículo 91 del Estatuto de Roma.

La orden de detención no perderá vigencia sino hasta que la misma Corte Penal Internacional lo solicite. Para ello, el Ministerio Público deberá solicitar la emisión de la resolución judicial correspondiente.

Artículo 61. Audiencia de Detención y Entrega. Detenida una o más persona por solicitud de la Corte Penal Internacional, el órgano jurisdiccional competente deberá convocar a audiencia al Ministerio Público y garantizar la presencia de un abogado defensor al detenido.

El Juez deberá cerciorarse de la identidad de la persona mediante la indagación de datos personales, conforme las reglas del artículo 82 del Código Procesal Penal y la documentación del detenido. Posteriormente se le hará saber los motivos de la detención expresándole que la Corte Penal Internacional solicitó al Estado de Guatemala detenerle por la comisión de delitos perseguibles por el derecho internacional.

Se le hará saber que tiene derecho a un abogado defensor particular o de oficio del Estado de Guatemala. Si el detenido desea contratar defensor particular, el Juez dará un plazo de 24 horas para que éste sea informado y pueda tener



acceso a su defendido. Agotado el plazo, y no teniendo por apersonado al abogado defensor, se nombrará un abogado defensor de oficio.

Se le indicará que se garantiza su derecho a declarar en cualquier momento sobre lo que se actúe en la audiencia o permanecer en silencio, lo cual no prejuzga sobre su situación judicial frente a la Corte Penal Internacional.

El Ministerio Público deberá intimarle al detenido los delitos por los cuales fue detenido, y darle lectura a la orden de detención emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.

Artículo 62. Medidas de Coerción. Una vez detenida la o las personas, el juez deberá dictar una medida de coerción que garantice la entrega efectiva a la Corte Penal Internacional.

La prisión preventiva será autorizada por el plazo máximo de tres meses y podrá ser ampliado de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal. En igual forma aplicará para el caso de solicitudes concurrentes.

El detenido o su defensa podrán solicitar al Juez la aplicación de otra medida de coerción. Previo a resolver, el Juez deberá notificar de forma inmediata a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional para recibir sus recomendaciones de conformidad con el artículo 59.5 del Estatuto de Roma y así ratificar o modificar la medida de coerción. El plazo máximo para la recepción de las recomendación será de tres meses, tiempo en el cual la persona guardará prisión preventiva, vencido el plazo el Juez deberá requerir al Ministerio Público solicite la ampliación de la prisión preventiva o bien otorgará la libertad inmediata al detenido.

Artículo 63. Entrega. No existiendo otras diligencias, el Ministerio Público requerirá al Juez emita la orden de entrega a la Corte Penal Internacional, de conformidad con el artículo 89.1 del Estatuto de Roma.

Artículo 64. Detención en tránsito. Si la Corte Penal Internacional o un Estado solicitan al Estado de Guatemala autorizar la detención en tránsito de una persona que ha sido detenida para la entrega, de conformidad con el artículo 89.3.b del Estatuto de Roma, la comunicación se hará al Ministerio Público, quien deberá

poner en aviso al órgano jurisdiccional competente para que en el periodo de seis horas emita autorización judicial y ordene las diligencias debidas de seguridad y custodia a los entes correspondientes.

Ninguna autoridad distinta a la judicial podrá autorizar el tránsito de una persona detenida para la entrega. En el caso de un aterrizaje de emergencia en aeropuertos nacionales o anclaje imprevisto en zonas marítimas nacionales, el capitán de la nave deberá solicitar provisionalmente la ayuda necesaria para la guarda y custodia de la persona detenida, la cual será dada en resguardo de la cooperación con la Corte Penal Internacional y de la seguridad del territorio nacional, debiendo procederse inmediatamente a una solicitud de autorización judicial para detención en tránsito.

Asimismo debe informarse inmediatamente, a la Corte Penal Internacional y al Estado al que pertenece la nave, de la situación para que formalice la solicitud de detención en tránsito.

Artículo 65. Solicitudes concurrentes. En solicitudes de entrega y extradición hechas por los mismos delitos y para la misma persona, se aplicará el artículo 90 del Estatuto de Roma.

Artículo 66. Solicitud de dispensa del principio de especialidad. Las solicitudes de dispensa del principio de especialidad de acuerdo al artículo 101.1 del Estatuto de Roma, serán tramitadas por vía de los incidentes regulados en el código procesal penal.

Si en relación con los hechos por los cuales se formulan nuevos cargos y se fundamenta la dispensa, existieran investigaciones o actuaciones judiciales en curso en la jurisdicción nacional u otras que pudieran ser interferidas, el órgano jurisdiccional pedirá al Ministerio Público informe de las mismas a la Corte Penal Internacional, poniéndolas a su disposición y remitiendo los antecedentes que se solicitaren.

Artículo 67. Solicitud de Entrega Temporal. Cuando la solicitud de detención y entrega recaiga sobre una persona que se encuentra siendo procesada o cumpliendo condena en el país, por delito distinto a los de competencia de la Corte Penal Internacional, el Ministerio Público deberá informar al órgano judicial

competente para que éste solicite el estado actual del proceso interno o el estado actual de ejecución de pena.

Si el proceso interno se encuentra en la fase inicial o intermedia, el juez podrá solicitar al órgano que conoce la causa interna suspenda la persecución penal y permita la entrega temporal a la Corte Penal Internacional para su procesamiento en ella. Bajo la condición previamente establecida, que finalizado el proceso internacional, la persona será devuelta a la competencia judicial interna para la finalización de su proceso.

Si el proceso interno se encuentra en la fase del debate o juicio, se deberá finalizar esta etapa y, aun estando pendiente de resolver las impugnaciones correspondientes de la sentencia, la persona podrá ser entregada a la Corte Penal Internacional bajo la promesa de ser devuelta a la competencia judicial interna.

Si la Corte Penal Internacional sentencia de forma condenatoria a la persona, y luego de finalizado el proceso penal interno de forma absolutoria, el órgano jurisdiccional notificará a la corte penal internacional para que proceda a determinar la forma y lugar de cumplimiento de la sentencia. Si en el proceso ante la corte penal internacional y en el proceso interno la persona resultare condenada, la Corte Penal Internacional podrá negociar con el Estado la conveniencia de que se cumpla sentencia en un lugar distinto a Guatemala, garantizando que la condena impuesta en el órgano interno será respetada.

Artículo 68. Orden de Comparecencia. Cuando se solicite la comparecencia de una persona no será necesaria la emisión de una orden de detención. Sin embargo, deberá notificarse a la persona requerida a comparecer a la Corte Penal Internacional, que debe hacerse presente ante el Ministerio Público el cual podrá solicitar al órgano judicial competente la emisión de una medida de coerción distinta a la prisión preventiva.

Para efecto del cumplimiento de la comparecencia deberá observarse lo establecido en el artículo 58.7 del Estatuto de Roma.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VÍCTIMAS Y PERITOS



Artículo 69. Solicitud de comparecencia. Cuando se solicite la comparecencia de una víctima, testigo y/o perito, el Ministerio Público deberá solicitar al juez que se cite a dicha persona para ponerle en conocimiento de la solicitud de comparecencia realizada por la Corte Penal Internacional.

La víctima, testigo y/o perito no pueden ser obligados a declarar o peritar sobre las causas que la Corte Penal Internacional inquiera. En el caso de los peritos, si estos fueran funcionarios o empleados del Estado de Guatemala, deberán cumplir con la solicitud de la Corte Penal Internacional en función de la efectiva cooperación.

Todo perito funcionario o empleado del Estado de Guatemala mantiene su libertad técnica de opinar conforme sus conocimientos empíricos, técnicos y profesionales, ningún funcionario podrá ejercer condición y/o presión para condicionar su peritaje.

Artículo 70. Protección de la víctima, testigo o perito. Una vez notificada la solicitud de la Corte Penal Internacional y apersonada la víctima, el testigo o el perito ante el tribunal, este deberá ser protegido conforme a la ley de protección de sujetos procesales. De ser necesario, deberá solicitarse cooperación a la Corte Penal Internacional sobre medidas o disposiciones que garanticen la vida y la integridad de la persona.

En ningún momento podrá ponerse en conocimiento de medios de comunicación o de cualquier otro sistema de información pública o social, la solicitud de la Corte Penal Internacional y/o la identidad de las personas. El funcionario que incumpla con esta disposición será sancionado conforme a Derecho.

Artículo 71. Comparecencia mediante sistemas de comunicación electrónica u otros medios especiales. Para la comparecencia de víctimas, testigos o peritos ante la Corte Penal Internacional mediante sistemas de comunicación electrónica u otros medios especiales, se deberán observar las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal guatemalteco.

Artículo 72. Medidas especiales. En el caso de víctimas o testigos traumatizados, niñez, personas adultas mayores, víctimas de violencia sexual o cuya situación social la pone en mayor vulnerabilidad, el Ministerio Público deberá

solicitar de acuerdo a las reglas de procedimiento 87 y 88 de la Corte Penal Internacional, medidas especiales para garantizar la seguridad de las personas y la comparecencia de las mismas frente a la Corte Penal Internacional.

En caso de incumplimiento por parte del Ministerio Público, las víctimas, sus representantes u organizaciones podrán dirigirse directamente a la Corte Penal Internacional observando las reglas de procedimiento establecidas por la misma Corte.

Artículo 73. Solicitud de víctimas a participar por sí o mediante su representante. Cuando la víctima desee participar en el proceso ante la Corte Penal Internacional por sí misma o mediante sus representantes, podrá solicitar al Ministerio Público o al Ministerio de Relaciones Exteriores transmita su solicitud a la Corte Penal Internacional, estos deberán de facilitar la comunicación y hacer llegar la solicitud de la víctima de forma pronta y sin dilación alguna.

La calificación de la solicitud y sus requisitos son exclusivos de la Corte Penal Internacional, quien conforme las reglas de procedimiento determina el cumplimiento de los requisitos.

Artículo 74. Amicus Curiae. De acuerdo con la regla 103 de las reglas de procedimiento o prueba, cualquier persona u organización, de forma voluntaria podrá solicitar a la Corte Penal Internacional le autorice presentar amicus curiae u observaciones.

Esta comunicación deberá ser a través del Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales no podrán objetar se presente la solicitud y deberán hacerlo sin dilación alguna.

CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO SOBRE BIENES, DINERO Y OTROS ACTIVOS.

Artículo 75. Solicitud. El Juez competente, a solicitud de Ministerio Público, emitirá sin notificación ni audiencia previa, autorización para la inspección y registro, u ordenar el secuestro, con la finalidad de preservar la disponibilidad de los bienes, productos, instrumentos o dinero sobre el cual recae solicitud de la

Corte Penal Internacional. Dicha solicitud deberá ser conocida y resuelta por el Juez inmediatamente.

En caso de cuentas bancarias se ordenará el embargo e inamovilidad del dinero.

Para efectos de las diligencias de inspección y registro, o de orden de secuestro se observarán las reglas contenidas en los artículos del 187 al 193 y del 198 al 200 del Código Procesal Penal.

Artículo 76. Embargo de oficio. Recibida una solicitud de detención y entrega por el Ministerio Público y correspondientemente calificada por el órgano judicial, en la resolución que ordena la detención se deberá decretar de oficio el embargo de las cuentas bancarias y bienes que puedan encontrarse a nombre de la persona sobre quien recae la orden de detención. El Ministerio Público deberá hacer efectiva la notificación a las entidades bancarias y registros correspondientes.

Artículo 77. Demora. Para el cumplimiento de las solicitudes formuladas por la Corte Penal Internacional en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales de su competencia, en donde sea urgente el secuestro de los bienes, productos o dinero, el embargo de cuentas y la inmovilización de las mismas, el Ministerio Público podrá ordenar el secuestro, embargo o inmovilización de bienes, documentos y cuentas bancarias, pero deberá solicitar la autorización judicial inmediatamente, acompañando el inventario respectivo de éstos e indicando el lugar donde se encuentran.

El Juez podrá no autorizar la orden emitida por el Ministerio Público únicamente en los casos en donde las cosas, bienes, productos, dineros y cuentas no correspondan con la solicitud precisa de la Corte Penal Internacional.

Artículo 78. Custodia. Los bienes, productos, instrumentos y dinero quedarán bajo la custodia del Ministerio Público quien será responsable de su conservación.

Las cuentas bancarias embargadas son responsabilidad de las entidades bancarias, quienes deberán informar inmediatamente al Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos de la existencia de cuentas a nombre de la o las

personas indicadas, la cantidad de dinero existente, el tipo de moneda y la fecha de las últimas transacciones.

La información relevante sobre la dirección registrada y otros datos generales es reservada y solo será puesta en conocimiento del Ministerio Público sin necesidad de orden judicial.

Artículo 79. Comiso o decomiso. Si la Corte Penal Internacional sentencia de forma condenatoria a la persona procesada, y emite la pena contenida en el artículo 77.2.b) del Estatuto de Roma, el órgano judicial guatemalteco emitirá decreto consistente en la pérdida a favor de la Corte Penal Internacional de los bienes, instrumentos, productos, dinero, cuentas bancarias y cualquier otro activo.

Si los bienes fueren consistentes en bienes inmuebles se promoverá por la vía diplomática que la Corte Penal Internacional ceda éstos al Estado de Guatemala para ser utilizados en beneficio de la educación, cultura, arte y promoción de la memoria de las víctimas mundiales de delitos de relevancia internacional.

Artículo 80. Terceros de buena fe. Cuando los activos han sido secuestrados, embargados o inmovilizados para efecto de disponibilidad durante un proceso de investigación o enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional, las personas que tengan interés legítimo y legal sobre los bienes y dinero podrán apersonarse ante el órgano judicial competente y declarar su interés de forma verbal o escrita.

A la declaración de interés deberá acompañarse documentos que acrediten la posesión o la propiedad legal de los bienes y otros activos en su caso. Dicho apersonamiento deberá ser dado a conocer a la Corte Penal Internacional, para que sea valorado conforme la regla de procedimiento 147 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional.

El tercero de buena fe apersonado, podrá solicitar al órgano de comunicación del Estado de Guatemala el apoyo necesario para comparecer a audiencia adicional sobre cuestiones relativas a la imposición de la pena, en donde se conozca su interés sobre los bienes y otros activos, de conformidad con la regla 143 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional.

Artículo 81. Devolución. Establecida la legalidad y legitimidad del tercero de buena fe u obtenida una sentencia absolutoria, en donde los bienes y otros activos puedan ser devueltos a la persona que fue procesada, el Juez ordenará la devolución de los bienes conforme el acta de inventario inicial.

No serán devueltos los bienes cuando, habiendo sido absuelto por la Corte Penal Internacional, el Ministerio Público considere que los bienes provienen de actividades ilícitas, para lo cual deberá actuar conforme la legislación nacional para su extinción de dominio en favor del Estado.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 82. Aportación financiera del Estado de Guatemala. El Ministerio de Finanzas deberá establecer la partida presupuestaria correspondiente para el pago de la cuota como Estado ante la Asamblea de Estados Partes.

Artículo 83. Nacionales como funcionarios de los órganos de la Corte Penal Internacional. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto de Roma y de los reglamentos, así como de los acuerdos internos de la Corte Penal Internacional, las personas guatemaltecas podrán ser propuestas o presentadas como candidatos ante la Corte Penal Internacional.

Artículo 84. Se declara de interés que los sectores académicos, gremiales, así como las instituciones del sistema de justicia cuentan con procesos de formación y capacitación para la difusión del Derecho Penal Internacional y sus disposiciones.

Artículo 85. Vigencia. La presente ley cobra vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial, a excepción de este artículo el cual cobra vigencia el mismo día de la publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

00000101

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA A LOS _____DÍAS DEL MES DE
_____DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.